

El 25 de marzo, 2021

Presidente Joseph Biden
Vicepresidente Kamala Harris
La Casa Blanca
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20050

Estimados presidente Biden y vicepresidente Harris:

Apreciamos la promesa de su gobierno de garantizar un sistema de inmigración justo, humano y ordenado que acoja a los inmigrantes y restablezca el acceso al asilo. Nos sentimos alentados por las primeras medidas que su administración ha tomado, como suspender los Protocolos de Protección al Migrante, más conocidos como la política de "Quédate en México", y procesar a los solicitantes de asilo que han estado esperando en dicho país. Trabajaremos con usted para restablecer plenamente el acceso al asilo en nuestra frontera y rescindir todas las políticas anti-asilo, haciendo que su administración rinda cuentas de estos compromisos.

Igualmente, acogemos con satisfacción otras acciones iniciales, como la orden ejecutiva que establece la creación de un marco regional integral para abordar las causas de la migración y las declaraciones por parte de altas autoridades señalando que este gobierno incluirá en su enfoque la lucha contra la corrupción, el avance del Estado de Derecho, la promoción del respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos. Estamos convencidos de que estos elementos deben ser absolutamente centrales tanto en los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos como en sus labores de asistencia.

Instamos a su administración a que consulte con **una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil de todos y cada uno de los países y tenga en cuenta los comentarios de estas consultas** cuando desarrolle e implemente una estrategia que aborde las causas fundamentales de la migración. Aconsejamos tomarse el tiempo necesario para desarrollar la estrategia final, de modo que Estados Unidos pueda dar un giro a su diplomacia y programas de asistencia para no repetir los errores del pasado, incluidos los aspectos de la política de Estados Unidos que han contribuido a violaciones de los derechos humanos y migración forzada de la región.

Como organizaciones religiosas, humanitarias y de la sociedad civil, muchas de las cuales con décadas de experiencia trabajando en los países del norte de Centroamérica junto con líderes de la sociedad civil, comunidades indígenas y afrodescendientes, movimientos sociales, activistas de derechos humanos, ambientales y LGBTQ+, y comunidades religiosas, entre otros grupos, instamos a su administración a **desarrollar una estrategia que aborde las causas fundamentales de la migración y se adhiera a los siguientes principios:**

- ***El gobierno de Estados Unidos no debería apoyar a funcionarios corruptos y fuerzas de seguridad abusivas, sino a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en aras de construir sociedades más democráticas, justas e inclusivas.*** La posición de Estados Unidos debería hacerse visible a través de acciones y declaraciones por parte de embajadores estadounidenses, funcionarios del Departamento de Estado y funcionarios del gobierno estadounidense en general.
- El gobierno de Estados Unidos debe apoyar y amplificar los llamados de la sociedad civil para que los gobiernos aborden las causas estructurales y sociales que impulsan la migración forzosa, tales como corrupción, impunidad, violaciones de los derechos humanos, violencia de bandas y de género, pobreza y desigualdad, modelos económicos excluyentes y el cambio climático. La política de Estados Unidos debe partir de la base de que la corrupción, la pobreza y las violaciones a los derechos humanos en

estos países no son inevitables, sino que son el resultado de decisiones deliberadas por parte de los gobernantes.

- El gobierno de EEUU debería priorizar que los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador pongan fin y reviertan el cierre de espacios para la sociedad civil a través de leyes restrictivas contra las ONG, códigos penales que criminalizan la protesta social y la libertad de expresión, casos legales falsos contra defensores de derechos humanos, uso de la fuerza contra manifestantes y movimientos sociales, campañas de desinformación dirigidas a líderes de la sociedad civil y ataques contra la libertad de prensa. En los últimos años se ha producido un aumento alarmante de ataques contra los defensores de derechos humanos, incluidos activistas ambientales y defensores del derecho a la tierra, líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, personas LGBTQI+ y miembros de la prensa. Algunos de estos ataques fueron infligidos por parte de actores estatales y coincidieron con una tendencia creciente hacia el autoritarismo en cada uno de los países. Estos ataques son una amenaza contra la democracia y los gobiernos deberían rendir cuentas por cualquier papel o complicidad en ellos, así como por no investigarlos, perseguirlos y poner fin a los mismos. Como parte de esa estrategia central y a fin de abordar las causas de fondo es necesario atajar el cierre de espacios cívicos, dado que los ataques a los líderes de la sociedad civil impulsan la migración forzada y la sociedad civil es un actor clave en la construcción de soluciones sostenibles y justas a los problemas sistémicos de Centroamérica.
- El gobierno de EEUU debería instar a todos los gobiernos a garantizar y respetar la independencia y separación de poderes del poder judicial, la oficina del defensor/procurador/comisionado de los derechos humanos y otras instituciones gubernamentales, tal y como esté estipulado en la constitución de cada país. Estados Unidos debería recomendar encarecidamente que se seleccione a fiscales generales, jueces y personal judicial de conformidad con los méritos de su carrera profesional.
- El gobierno de EEUU debería instar a los gobiernos a fomentar la transparencia y el acceso a la información, lo que podría empoderar a la sociedad civil, mejorar la gobernanza y prevenir la corrupción.
- El gobierno de EEUU debería instar a los gobiernos a desarrollar economías más inclusivas, empezando por reformas fiscales a fin de recaudar impuestos equitativos y suficientes para poder realizar inversiones públicas y desarrollar programas sociales. Asimismo, los gobiernos deberían fomentar estrategias para que las economías puedan superar su dependencia en industrias extractivas y monocultivos a gran escala, perjudiciales para el medio ambiente y la sociedad. La política de EE.UU. en este ámbito, como en otros, debería centrarse en el respeto a los derechos humanos, incluido el derecho de las comunidades locales a ser consultadas sobre agendas y proyectos de desarrollo. El fomento del empleo formal y la lucha contra la discriminación de género son también elementos importantes.
- El gobierno de EEUU debería instar el respeto de los derechos laborales, incluida la libertad de asociación, y el fin de la impunidad en casos de violencia contra sindicalistas.
- El gobierno de EEUU debería instar firmemente a que los gobiernos tomen medidas para poner fin a la discriminación de mujeres y personas LGTQI+, así como de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Igualmente, debe asegurarse de que sus propios programas y políticas aborden de forma proactiva la discriminación de estos grupos vulnerables.

A medida que su administración desarrolle una estrategia de asistencia, le instamos a que considere lo siguiente:

- En la medida de lo posible, la cooperación debería canalizarse a través de organizaciones humanitarias y no gubernamentales locales. La ayuda a los gobiernos debe ser estrictamente limitada y cuidadosamente dirigida, dados los problemas de corrupción.
- USAID debería establecer un calendario periódico de consultas con un grupo diverso de organizaciones de la sociedad civil de cada uno de los países (sin limitarse a los beneficiarios de fondos del gobierno de EEUU o a las organizaciones con estatus legal de ONG), así como con actores de la sociedad civil estadounidense, en aras de obtener aportes y recomendaciones sobre estrategias y programas de asistencia.
- Su administración debería abordar inmediatamente dos emergencias: la pandemia de COVID-19 y el impacto de los huracanes Eta e Iota, aumentando la ayuda humanitaria e incrementando la asistencia para gestionar y recuperarse de estas crisis. La adaptación al cambio climático y su mitigación deben ser el centro de los esfuerzos de reconstrucción. A fin de no desestabilizar aún más las economías, debería volver a designarse el TPS a Nicaragua, Honduras y El Salvador, y otorgarse dicho estatus también a Guatemala. El Departamento de Estado debería proporcionar asistencia adicional a la Organización Panamericana de la Salud, brindar apoyo para establecer servicios de salud en poblaciones pobres y aisladas, y facilitar el acceso a vacunas.
- La cooperación estadounidense debería centrarse en grupos vulnerables, como niños y jóvenes, mujeres, poblaciones indígenas y garífunas y personas LGBTQI+. Las áreas prioritarias deberían incluir: estrategias comunitarias de prevención de la violencia; aumento de oportunidades educativas y laborales para jóvenes; iniciativas de la sociedad civil y de múltiples partes interesadas que aborden la violencia sexual y de género contra mujeres y niñas; fortalecimiento de los sistemas locales de bienestar y protección de la infancia; programas para abordar la violencia contra las personas LGBTQI+ y promover sus derechos; desarrollo rural sostenible e inclusivo; esfuerzos para hacer frente a la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho, incluido el fortalecimiento de la independencia e imparcialidad de fiscales generales, jueces, fiscales y oficinas del defensor del pueblo, y apoyo técnico, financiero y diplomático a las unidades especiales de la fiscalía que investiguen casos de corrupción, y a las iniciativas independientes de lucha contra la corrupción.
- Los programas que aborden las causas fundamentales de la migración deben basarse en políticas que promuevan la igualdad de género y racial, el desarrollo inclusivo y los derechos de los niños. Todos los programas gubernamentales y de USAID que afecten a los niños, incluidos los programas bajo el marco de CARSI, deberían contar con expertos en desarrollo infantil e implementarse teniendo en cuenta la perspectiva y las necesidades únicas de los niños.
- El gobierno de EEUU debería animar a los gobiernos a seguir estrategias en materia de seguridad ciudadana que sean equilibradas y respeten los derechos de los ciudadanos; que se centren en la prevención de la violencia a través de programas sociales, educativos y de desarrollo de la fuerza laboral; que mejoren los sistemas de justicia y el respeto de los derechos humanos; y que se concentren en la rehabilitación, en lugar de las estrategias de "mano dura". Estados Unidos no debería proporcionar asistencia dirigida a las Fuerzas Armadas, la Policía Militar del Orden Público de Honduras, a fuerzas policiales con antecedentes de prácticas abusivas, ni a la militarización de las fronteras.

- La estrategia antinarcóticos del gobierno estadounidense debe volver a centrarse en los profundos vínculos que existen entre las organizaciones de narcotraficantes, los funcionarios del gobierno y de seguridad, y las entidades empresariales. Debe enfocarse en desmantelar las alianzas que están detrás del tráfico, el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada, y que impulsan las violaciones de los derechos humanos y la violencia en la región.
- La política de Estados Unidos a través de USAID, United States Development Finance Corporation y Millennium Challenge Corporation y a través de su posición en las instituciones financieras multilaterales debería guiarse por el hecho de que la corrupción impregna partes del sector empresarial, así como del Estado en estos países. La corrupción del sector empresarial alimenta los abusos de los derechos humanos en toda la región: el asesinato de Berta Cáceres es tan sólo un trágico ejemplo. Estados Unidos debe asegurarse de que cualquier programa de asistencia y préstamo incluya rigurosas salvaguardas y supervisión, contenga políticas contundentes contra las represalias, respete y proteja los derechos de los ciudadanos, y garantice el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes al consentimiento libre, previo e informado. De hecho, no solo no debería financiar proyectos y préstamos que violen estos términos, sino que debería votar en contra de los mismos.
- Su administración, tras una cuidadosa consulta con las partes interesadas, especialmente a organizaciones medioambientales, indígenas y afrodescendientes de Estados Unidos y América Latina, debería lanzar una campaña intensiva para abordar y mitigar los impactos del cambio climático. La campaña debe incluir un enfoque en la protección de los activistas ambientales, comunitarios, indígenas y afrodescendientes. Estas son las voces de las comunidades que soportan el peso del cambio climático y también ofrecen soluciones esenciales.

Creemos que si el gobierno de Estados Unidos siguiera estos principios y estrategias, reconociera que se requiere de una perspectiva y un compromiso a largo plazo, y consultara regularmente con las organizaciones de la sociedad civil de cada país, la asistencia y la diplomacia de Estados Unidos podrían suponer una valiosa contribución y garantizar que las personas vivan de forma segura y digna en la región, de modo que la migración se convierta en una opción, y no una estrategia de supervivencia.

Gracias por tener en cuenta estas recomendaciones.

Atentamente,

Alianza Americas
 American Friends Service Committee
 American Jewish World Service
 Bread for the World
 Center for Democracy in the Americas
 Center for Gender & Refugee Studies
 Central American Resource Center (CARECEN)
 Central American Resource Center (CARECEN-LA)
 Church World Service
 Columban Center for Advocacy and Outreach
 Disciples Center for Public Witness
 Disciples Refugee & Immigration Ministries
 EarthRights International
 Franciscan Action Network
 Friends Committee on National Legislation

Global Exchange
Global Ministries of the Christian Church (Disciples of Christ) and the United Church of Christ
Jesuit Conference Office of Justice and Ecology
Kids in Need of Defense
Latin America Working Group (LAWG)
Leadership Conference of Women Religious
Lutheran World Relief
Maryknoll Office for Global Concerns
Mennonite Central Committee U.S. Washington Office
Missionary Oblates
Oxfam America
Presbyterian Church (USA) Office of Public Witness
Red de Pueblos Transnacionales
Sister Parish
Sisters of Mercy of the Americas – Justice Team
The United Methodist Church - General Board of Church and Society
United Church of Christ, Justice and Witness Ministries
Washington Office of Latin America (WOLA)

Cc: Antony Blinken, Secretary of State

Juan Gonzalez, Senior Director for the Western Hemisphere, National Security Council

Roberta Jacobson, Coordinator for the Southern Border, National Security Council

Julie Chung, Acting Assistant Secretary, Western Hemisphere Affairs, State Dept.

Ricardo Zúñiga, Special Envoy for the Northern Triangle

Katherine Dueholm, Acting Deputy Assistant Secretary, Mexico and Central America, State Dept.

Emily Mendrala, Deputy Assistant Secretary, Cuba and Regional Migration, State Dept.

Patrick Ventrell, Director, Central America office, State Department

Mileydi Guilarte, Deputy Assistant Administrator, USAID/LAC